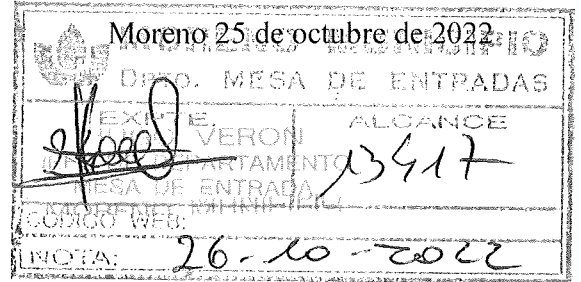




INTERPONE RECURSO REVOCATORIA POR NULIDAD ABSOLUTA

Señora Intendente Municipal de la  
Municipalidad de Moreno  
MARIEL FERNANDEZ  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D



GUILLERMO EDUARDO CONY, abogado, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; manteniendo el domicilio constituido en estas actuaciones, vengo a interponer recurso de revocatoria contra el Decreto N° 3727/22, por ser un acto nulo, de nulidad absoluta, y permitiendo a la Administración que proceda a sanear los graves errores cometidos.

I. Vengo a interponer el recurso de revocatoria en los términos del artículo 89 de la Ordenanza General N° 267/80 contra la decisión de rechazar los recursos interpuestos en las actuaciones Expte. 4078-241124-U-2022, conforme el artículo 1ero. del Decreto N° 3727/22; en el Expte. 4078-2424-U-2022, conforme el artículo 2do. del Decreto N° 3727/22; y la denegatoria de la vista con relación al primero de los expedientes citados.

Fundo mi pretensión en las siguientes consideraciones:

II. Análisis del Decreto N° 3727 del 14 de octubre de 2022.

1. La Municipalidad de Moreno (la Municipalidad) decidió resolver en un solo acto las cuestiones tratadas en las siguientes actuaciones:

1.1. Expte. 4078-241124-U-2022: Estas actuaciones se originaron en el Recurso Administrativo interpuesto el 31 de agosto de 2022 contra la decisión de llamar a una Licitación Pública para la construcción del Polo Educativo Moreno en el predio sito en la calle Merlo, entre Corvalán y Vicente López, propiedad de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y sede de la Espunm/Itunm - Unm-Tec.

Advierto que por cédula de notificación de fecha 16 de septiembre de 2022, la Municipalidad notificó a la UNM que el descargo y pedido de pronto despacho presentado en el Expte. 4078-229819-E-2021 sería resuelto junto con el Expte. 4078-241124-U-2022, por lo que deben considerarse a tales efectos una sola actuación.

1.2. Expte. 4078-241988-U-2022: Esta actuación se originó en la nota presentada por la UNM el 20 de septiembre de 2022, por medio de la cual se rechazó la decisión de la tramitación conjunta de los dos expedientes mencionados en el punto precedente, se solicitó

que se haga efectiva la vista solicitada oportunamente, y que se resuelva el recurso administrativo interpuesto el 31 de agosto de 2022.

1.3. Expte. 4078-2424-U-2022 (Alcance N° 13373/2022): Estas actuaciones se originaron en el Recurso Administrativo interpuesto el 29 de septiembre de 2022 contra el Decreto Municipal 3004 del 22 de diciembre de 2021, por ser nulo de nulidad absoluta, por graves vicios en sus antecedentes de procedimiento, causa, motivación, finalidad y objeto, entre otros.

2. El Decreto N° 3727/22 consideró que las actuaciones reseñadas constituyen “la impugnación de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) al Decreto Municipal N° 1779/22, de fecha 6 de junio de 2022”, por el cual se dispuso el llamado a Licitación Pública para la Construcción del Polo Educativo Moreno en el predio propiedad de la UNM.

La lectura del punto anterior es suficiente para desvirtuar tamaña simplificación. La UNM cuestionó la nulidad del visado del Plano de subdivisión oportunamente presentado, cuestionó el llamado a Licitación Pública, y cuestionó la decisión de inscribir el predio a nombre de la Municipalidad.

3. La oportunidad de las impugnaciones presentadas.

Sostiene la Municipalidad en el Decreto N° 3727/22 que las presentaciones realizadas por la UNM son extemporáneas. Para ello, utiliza un ardid consistente en no responder las presentaciones oportunamente cursadas, y paralelamente publicar edictos para dejar firmes actos que de haber sido notificados conforme a derecho hubieran sido objetados.

Debe recordarse que por el Decreto 1779/22, la Municipalidad llamó a la Licitación Pública N° 33/22 para la construcción del Polo Educativo Moreno. Dicho Decreto dispuso su publicación por dos días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en el Diario La Opinión de Moreno y en la página web del Municipio.

La apertura de ofertas fue el día 24 de junio de 2022 –acto que también fue publicado en los mismos medios y bajo la misma modalidad-, conforme al principio general contenido en el artículo 112 de la Ordenanza General N° 267 (OG 267). Dicho artículo dispone: “ARTICULO 112: Los actos de la administración municipal se publicarán en los casos y con las modalidades establecidas por las normas que les sean aplicables. Los actos administrativos que tengan por destinatario una pluralidad indeterminada de sujetos, y aquéllos para los que no fuere exigible la notificación personal, no producirán efectos respecto de los mismos en tanto no sean publicados legalmente. La publicación se efectuará una vez terminado el procedimiento y será independiente de la que se hubiere efectuado con anterioridad a los fines de información pública”.

Tal como se señaló, cuando la UNM tomó conocimiento de dicho acto se presentó, continuando otras presentaciones pendientes de resolución por parte de la Municipalidad, el 31 de agosto de 2022. En esa ocasión, solicitó vista de las actuaciones, suspensión del acto administrativo, y nulidad del accionar municipal en el Expte. 4078-241124-U-2022.

La Municipalidad sostuvo que esta impugnación debía tratarse como recurso administrativo, y como tal la consideró extemporánea por haber sido planteada al haber sido interpuesta vencido el plazo reglamentario de diez días contados desde la última publicación de edictos el 14 de junio de 2022.

Dado que el plazo para interponer el recurso administrativo se encontraría vencido, la Municipalidad estimó que el reclamo debe tratarse como denuncia de ilegitimidad. De esta manera la Administración Municipal blinda su proceder pues la denuncia de ilegitimidad no admite su revisión judicial.

El razonamiento de la Municipalidad es falso, y además adolece de mala fe. Se trata de una ardid para esconder a la UNM este acto llevado adelante en penumbras.

Sostiene el Decreto analizado que respecto a la notificación del llamado a Licitación, ésta se rige por el artículo 66 de la OG 267, que dispone: “ARTICULO 66º: El emplazamiento o citación de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore, se hará por edictos publicados en el "Boletín Oficial" y en el periódico de mayor difusión en la localidad, durante un (1) día. El emplazamiento o citación se tendrá por efectuado cinco (5) días después y se proseguirá el trámite en el estado en que se hallen las actuaciones”.

La mala fe aludida es patente: La UNM no es persona incierta, y no tiene domicilio desconocido. No solo eso, sino que además es parte en las actuaciones desde marzo de 2022, cuando se presentó, conforme al siguiente detalle:

3.1. El 29 de marzo de 2022, cuando el Administrador del Iduar anuló el visado en el Plano de Mensura y subdivisión (Expte. 4078-229819-E-2021). Luego de presentar dicho descargo, la UNM solicitó el levantamiento de la clausura dispuesta (17 de mayo), y presentó pronto despacho (24 de junio), todo en las mismas actuaciones. Sobre ello, no hubo ninguna respuesta, hasta el 14 de octubre de 2022, cuando se dictó el Decreto aquí analizado.

3.2. Además interpuso un descargo el 29 de agosto de 2022, y el recurso de fecha 31 de agosto en el Expte. 4078-241124-U-2022. Recién el 16 de septiembre, la Municipalidad notificó a la UNM que ambas presentaciones serían resueltas juntas.

3.3. Una notificación en disconformidad el 20 de septiembre de 2022, un cumplimiento de intimación el 26 de septiembre de 2022, y un nuevo recurso tramitado por Alcance N° 13373/2022. Sin respuesta hasta este Decreto.

En todas estas presentaciones advirtió de manera CLARA, FUNDADA Y RAZONADA QUE EL PREDIO ERA DE SU PROPIEDAD. La Municipalidad se negó a tratar este planteo a pesar de los prontos despachos interpuestos en mayo y junio, escondiendo las actuaciones.

Ahora queda claro que la falta de respuesta a los planteos, tuvo por finalidad poder llamar a la Licitación de manera semi clandestina, pretendiendo notificar a la UNM a través de edictos. NADA MÁS ILEGAL, ILEGÍTIMO Y FICTICIO.

No se trata de una mera queja. La propia OG 267 dispone que “Las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas deberán contener la pertinente motivación del acto y el texto íntegro de su parte resolutive, con la expresión de la carátula y numeración del expediente correspondiente (ARTICULO 62)”.

Y que “Las notificaciones se realizarán personalmente en el expediente, firmando el interesado ante la autoridad administrativa, previa justificación de la identidad, o mediante cédula, telegrama colacionado o certificado, recomendado, o por cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción y de la fecha en que se practicó. Cuando la notificación no se realice personalmente en el expediente, se practicará en el domicilio constituido por el interesado o, en su defecto, en su domicilio real” (ARTICULO 63).

En este momento, debo reiterar: La UNM se había presentado y reivindicado la titularidad del predio en marzo de 2022. No se comprende cómo entonces, como se resuelve no notificarle de un acto NULO, y que además afectaba sus derechos.

Reitero: La notificación por edictos a los que alude el artículo 66, solo es procedente cuando se cite a personas inciertas o cuyo domicilio se ignore.

#### 4. Los errores garrafales del Decreto

En este punto prefiero utilizar la expresión de errores garrafales y omitir otras calificaciones solo por respeto a la labor profesional de aquellos que confeccionaron el acto. Pero desde el punto de vista administrativo, además de la mala fe señalada, el acto presenta contradicciones graves con el ordenamiento jurídico.

##### 4.1. La grosera invocación de la teoría de los “actos propios”.

Esta teoría sostiene que a nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta”. Ese es el principio que se plasma en la regla “*venire contra factum proprium non valet*”.

Los presupuestos y requisitos para su correcta utilización, requieren la existencia de una conducta anterior del sujeto, la que, a su vez, tiene que ser relevante para el derecho, válida y eficaz, atribuible a esa persona. Luego de cumplidos tales presupuestos, se torna

necesario comprobar que existe, asimismo, otra actitud, lógicamente posterior, que dé lugar a una pretensión contradictoria con la conducta anterior.

Ahora bien, ¿cuál habría sido la conducta que la UNM adoptó de manera originaria y qué luego contravino?

Según este sorprendente análisis: haber consentido un llamado a licitación. Y de ello infiere que ahora no puede cuestionarlo. El enfoque es errado. El accionar propio de la UNM fue ni bien recibió una notificación de la Municipalidad respecto del inmueble en cuestión interpuso TRES impugnaciones directas antes de la fecha de la apertura de la Licitación: en marzo, mayo, y junio. Y luego, las restantes impugnaciones ya reseñadas.

La Municipalidad no solo no contestó ninguno, sino que informó que se contestarían más adelante. Ahora se advierte que dicha postergación se hizo para poder tramitar de manera oculta, manteniendo ajena a la propietaria del predio, el acto de licitación disponiendo de un lote que la Municipalidad no podría acreditar como propio.

Por ello, no puede sostenerse que la UNM consintió tácitamente el llamado a licitación sobre un predio ajeno a la Municipalidad y propio de la UNM.

Y el contrasentido mayor es invocar esta teoría, justo la Municipalidad, que ahora pretende desconocer lo que rubricó en el año 2010, según hemos explicado reiteradamente. Con el Convenio 246/2010, LA MUNICIPALIDAD ACEPTÓ LA CESIÓN DE TODO LOS TERRENOS IDENTIFICADO EN EL ANEXO I A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.

#### 4.2. Errores de fondo en el Decreto en cuestión

Uno de los fundamentos del Decreto es la opinión del Administrador General del IDUAR efectuado en el ya citado Expte 4078-229819-e-2021.

Previo a considerar su análisis “meduloso y con suficiente amplitud respecto de los argumentos que justifican o dan origen al derecho de propiedad del Municipio sobre el inmueble en cuestión”, debo recordar que dicho análisis fue impugnado, rebatido y descalificado por esta Universidad por medio de la presentación del 29 de marzo de 2022 de 11 fojas. Sin perjuicio de reconocer que la cantidad de fojas no justifica la legitimidad de un planteo, quiero señalar que la Municipalidad durante SIETE (7) MESES, ignoró nuestra refutación. Y ahora cuando debe resolverla exalta el razonamiento del Administrador del IDUAR sin mencionar siquiera los argumentos de la UNM.

Más allá de esa omisión, volvamos a considerarlo. El Administrador General del IDUAR, sostuvo que dicha fracción pertenece al Municipio por ser “equipamiento comunitario”. En función de ello, se invoca la Ley Provincial de facto N° 9533/80, que remite a la Ley N° 8912.

En refuerzo de este argumento, se invoca una Resolución N° 176/22 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba), que habría anulado el Plano de Subdivisión y Mensura 074-215-2021, Resolución que no ha sido notificada a la UNM, razón por la cual no ha podido ser objeto de impugnación aún.

En aquella ocasión sostuvimos la inaplicabilidad de dichas normas provinciales a esta situación dominial. Se trata de una cuestión que incluye relaciones entre los partes involucradas: el Estado Nacional, la Universidad Nacional y el Estado Municipal, que acordaron a través del Convenio 246 del año 2010, la asignación del uso de los espacios, y establecer una reserva de equipamiento “al solo efecto de relocalizar usos”. Esto lo distingue absolutamente de la normativa citada.

Así, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires, establece una obligación de cesión de superficie reservada al espacio verde, libre público y equipamiento comunitario, **solo cuando se trate de crear o ampliar núcleos urbanos, áreas o zonas nuevas**. Esa cesión debía hacerse en favor del estado Provincial, y luego por la Ley N° 9533, la cesión se trasladó hacia el Municipio.

En el presente caso, lejos estamos del encuadre legal aludido. Ello porque el predio involucrado en su totalidad es equipamiento, en cabeza de la Universidad Nacional de Moreno y la mera referencia a la reserva, no es como derivado de la creación de una nueva zona o área, sino con un objeto específico el cual era el de relocalizar los usos preexistentes situados en el corazón del funcionamiento de la Universidad.

Para entender este punto recomiendo volver a analizar el Convenio N° 246 del año 2010, para determinar la titularidad actual del predio en cabeza de la UNM, y de donde se advierte de manera expresa que la Municipalidad carece de toda pretensión sobre el mismo.

Allí la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (SENNAF), por entonces titular del inmueble asignó **al uso exclusivo de la UNM** los predios ubicados al sur de las calles Dorrego, Daract y Arribeños. Mientras que al Municipio de Moreno le asignó el espacio situado **al norte de dichas calles** (Ver la Cláusula Primera y ambos Anexos).

Se dispuso, en lo que aquí, interesa que ambas partes tomarían a su cargo “la custodia, guarda y protección” de los predios cedidos a cada una de ellas, “conforme Anexos I y II” (Cláusula Quinta). Tal como surge de dichos Anexos, la UNM tomó a su cargo todo lo delimitado en el Anexo I, y la Municipalidad todo lo delimitado en el Anexo II.

Y en la misma cláusula se dispuso que ambas partes reconocían la existencia “de usos preexistentes y se comprometen a respetarlos en su integridad; como también los usos que demanda el funcionamiento de los servicios educativos terciarios y universitarios

existentes, hasta su reubicación definitiva, comprometiéndose a aunar esfuerzos con el objeto de relocalizar cada uno de aquellos usos en predios apropiados, dentro de los límites del (ex) Instituto Mercedes de Lasala y Riglos, **todo a ello a los efectos de darle unidad y funcionalidad a la UNIVERSIDAD**".

Y en el mismo sentido se especificó: "En ese sentido, acuerdan iniciar un período de transición tendiente a articular la reubicación definitiva de los usos preexistentes en un predio apropiado dentro o fuera del (ex) Instituto Mercedes de Lasala y Riglos, y la progresiva transferencia de obligaciones hacia la UNIVERSIDAD".

Luego de enumerar los usos preexistentes, la cláusula quinta finaliza expresando que "asimismo la UNIVERSIDAD reconoce los usos preexistentes y se compromete a respetarlos hasta su relocalización definitiva".

Por el mismo acuerdo se estableció el compromiso de confeccionar un plano de subdivisión en el que se proyectara la reserva de un sector para alojar a dichos usos (cláusula décimo segunda).

Reitero: En el Anexo I al Convenio N° 246/10, figura dentro del espacio asignado a la UNM, una porción del terreno sobre la calle Merlo, entre Vicente López y Planes y Corvalán, señalada en el plano como "**espacio con posibilidad de ser destinado a los usos preexistentes**". Esto es, que la reserva se realizó al solo efecto de la relocalización de esos usos preexistentes, sobre la franja lateral al sur del Campus.

Es de destacar que todo el desarrollo de la reserva del predio y luego los planos de la relocalización de cada uno de los usos se hizo ante el propio IDUAR, con la intervención de sus distintos funcionarios, situación que en esta instancia no puede ser desconocida por el actual Administrador.

Entonces, no se trata como sostuvo su Administrador General, de un error porque esa reserva sería del Municipio, sino que estamos en presencia del cumplimiento de un convenio, donde luego de la reserva, hubo que relocalizar los usos, y luego de haberlo hecho, en virtud del mandato, la Universidad, realizó los planos de subdivisión y dejó el predio cada uno con su uso y su dominio perfeccionado.

Esta situación resultó convalidada por la sucesión de hechos y omisiones que la Municipalidad tuvo respecto del lote en cuestión durante 4 gestiones de gobierno.

Es decir que, durante todos estos años, desde el año 2010 hasta el presente, se realizaron cinco obras en esa franja de terreno, con participación de jurisdicciones diferente (Provincia de Buenos Aires, Municipalidad, Universidad Nacional de Moreno, y Estado Nacional), sin que la Municipalidad reclame los espacios invocando la titularidad del "equipamiento comunitario" por resultar fiel cumplimiento de lo acordado entre todas las partes.

Sobre este punto, es necesario señalar que la delimitación de los predios a cada uno de los usos preexistentes fue concertada con el IDUAR y la SENNAF oportunamente.

Debo recordar además que, por la cláusula séptima del Convenio del año 2010, tanto la Municipalidad de Moreno como la Universidad asumieron “la obligación de mantener el predio en condiciones óptimas de seguridad e higiene, proveyendo al mantenimiento general de las instalaciones y del predio en las porciones autorizadas por la Cláusula PRIMERA...”. En cumplimiento de esa manda, es que la Universidad desde ese mismo año, procedió a ocuparse de los predios a su cargo.

Por caso, la Universidad debió desalojar ocupantes que realizaban torneos particulares y apuestas, También alquilaban los espacios a terceros y consumían bebidas alcohólicas. Asimismo, procedió a mantener la limpieza, evitar la ocupación por indigentes, realizar vallados perimetrales y asignar vigilancia, dado los hechos vandálicos que hemos denunciado a la justicia oportunamente, como así también, los incendios intencionales que han podido comprobarse en varias oportunidades.

Todo ello, especialmente en el espacio que la Municipalidad aparece ahora -12 años después- reivindicándolo como propio y que forma parte de la parcela perteneciente a la Escuela Secundaria de la Universidad, entre el edificio existente y el delimitado para Centro de Formación Laboral de la Municipalidad. Sería bueno que la Municipalidad aplique, o explique, aquí la teoría de los Actos propios.

Y en el mismo sentido, téngase presente que por el Anexo II del Convenio 246 del año 2010, la Municipalidad recibió más de 13,8 hectáreas, en el área mencionada, incluidas las calles que ya estaban abiertas y la plaza Bujan también construida con anterioridad, en los que no llevo a cabo ninguna acción para su resguardo, uso o utilización. Por lo que su parte efectivamente incorporada por ese convenio (casi un 50%), todavía se mantiene desocupada y en estado de abandono.

Finalmente, sobre la particular expresión acerca de las demoras de la gestión en realizar una subdivisión supuestamente fundada en la definición de cesión para equipamiento comunitario del convenio de uso, vale señalar que tal expresión no figura en el citado convenio sino como “Espacios con propiedad a ser destinados a usos Preexistentes” y de acuerdo al plano de 2012 como “reserva para equipamiento comunitario a ceder”, lo que finalmente aconteció de acuerdo al plano de subdivisión del año 2021 aprobado por la provincia con la previa intervención de la actual gestión municipal y con anterioridad a la pretensión fechada el 22 de diciembre de 2021.

De ello se desprende que resulta contrario a los hechos de casi 12 años en los que el Municipio reconoció que no tenía cedido a su favor dicho predio y que la responsabilidad de impulsar la subdivisión estaba en cabeza del titular, el Estado Nacional tal cual establece la cláusula 12 del convenio también suscrito por el Municipio.



#### 4.3. Normas locales o normas federales.

De manera llamativa, la Municipalidad invoca artículos de la Constitución Nacional para legitimar su proceder. Aunque su lectura es tan parcial que debe considerarse errónea. En efecto, invoca el artículo 1ero, en consonancia con el 5to., para invocar la existencia de tres estamentos estatales: nacional, provincial y municipal. Luego destaca la reserva de poderes no delegados del artículo 75 inciso 12, junto al artículo 121, para invocar la aplicación de normas municipales.

Pero no consideró las dos normas que se aplican directamente. Por un lado, el artículo 31, que define el ordenamiento de esos tres estamentos estatales: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales...”.

Y sobre todo el artículo 75, inciso 30: “Artículo 75.- Corresponde al Congreso: ... 30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines”.

#### 4.4. La naturaleza del predio en cuestión. Establecimiento de utilidad nacional.

En esta instancia debe advertirse que el terreno que la Municipalidad de Moreno se resiste a reconocer de propiedad de la UNM, es un establecimiento de utilidad nacional, tal como lo consagra el artículo 75, inciso 30 de la Constitución Nacional. Han sido definidos como “aquellos espacios ocupados por edificios, dependencias, instalaciones o dispositivos destinados a poner en ejercicio las competencias que la Constitución Nacional coloca en cabeza del gobierno federal” (Manili, Pablo Luis, Establecimientos de Utilidad Nacional: Artículo 75 inciso 30 de la Constitución Nacional. -1ª. Ed.- Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004, pág. 18) (resaltado en el original).

Allí se verificó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció como establecimientos de utilidad nacional a los cuarteles, puertos, penitenciarías nacionales, aeropuertos internacionales, aeródromos, escuelas nacionales, agencias federales de impuestos, entre otros.

Especialmente, en materia de educación, incluyó a las universidades nacionales, y se cita un precedente trascendente para la cuestión aquí debatida. Se trata del caso “Municipalidad de Laprida c/ Universidad de Buenos Aires -Facultad de Ingeniería y Medicina-”, del 29 de abril de 1986, donde se consideró como establecimiento de utilidad

nacional a un campo de propiedad de la UBA cuyo producido se destinaba a esa Universidad.

La Corte Suprema además expresó que “Las municipalidades no son más que delegaciones de los poderes provinciales circunscriptas a fines y límites administrativos que la Constitución ha previsto, como entidades del régimen provincial y sujetas a su propia legislación (art. 5) ...”.

Y en tanto delegaciones de los poderes provinciales no pueden ahora desconocer lo que la Provincia reconoció (además de la Nación) a partir del Convenio aludido.

La Universidad Nacional de Moreno ha expresado claramente cuál es el destino del lote que era propiedad del Estado Nacional, y que fue cedido por Convenio celebrado por dicho Estado, la Municipalidad de Moreno, y la UNM: Allí funcionará su Escuela Secundaria Politécnica (ESPUNM), y su Instituto Tecnológico (ITUNM).

Se trata instalaciones destinadas a poner en competencia instalaciones del Estado Nacional, en ejercicio de políticas públicas de dicho Estado.

En efecto, por Resolución CFE N° 188/12 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN se aprobó el “PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y FORMACIÓN DOCENTE 2012-2016”, que contemplaba diferentes objetivos estratégicos a fin de recuperar los mandatos de la educación obligatoria y estableció formas de intervención para superar el fracaso escolar. En ese entendimiento, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN se propuso sumar al sistema educativo escuelas secundarias dependientes de las Universidades Nacionales, impulsando el Programa: PROYECTO DE CREACIÓN NUEVAS ESCUELAS SECUNDARIAS CON UNIVERSIDADES NACIONALES”.

5. La falacia del Decreto Municipal 3004/2021 dictado el último día hábil del 2021.

Sostiene la Municipalidad que en diciembre de 2021, dictó el Decreto N° 3004/21, al que califica como acto administrativo de carácter interno “por medio del cual el Departamento Ejecutivo ordena a una dependencia a su cargo procede a realizar los trámites necesarios para la inscripción del plano e cuestión, por cuanto los efectos del premencionado acto administrativo se circunscriben al ámbito municipal”.

Entiendo que esta afirmación merece ser puesta en duda. El Decreto en cuestión es un ejemplo de parquedad administrativa. En el Visto, refiere al Plano de Mensura y Subdivisión 74-245-2012, la invocación al artículo 2do. de la Ley N° 9533 del año 1980, y en la Disposición Técnico Registral N° 1/82, y a la supuesta cesión “de los inmuebles destinados a Reserva para Equipamiento Comunitario”. No hay considerandos, o en realidad hay una referencia a que “resulta menester proceder a inscribir el bien en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires”. Y luego en el artículo

lero. la orden de que se inscriba a nombre de la Municipalidad de Moreno el predio en cuestión.

Todo ello, sin identificación de Expediente alguno, ni referencia a la intervención de las áreas técnicas. Y curiosamente tres meses antes de que la Municipalidad declare que la propiedad que tiene la UNM desde el año 2010, ejercida de manera continuada y pacífica, fuere cuestionada por la Municipalidad.

Sin conjeturar, resulta curioso ver como una orden emanada en términos tan claros por la Sra. Intendente no se cumplió sino hasta casi seis meses después de emanada, cuando se inició el trámite de anulación en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Y más llamativo aún que en dicho trámite debió intervenir las oficinas municipales de Catastro y Planeamiento, que si habían intervenido visando el plano presentado por la UNM. Cómo es posible que hayan visado un plano y no lo advirtieran a la Sra. Intendente antes del dictado de este Decreto.

Y reconocer como fundamento el pormenorizado análisis del Administrador General del Iduar, al cual ya me referí en el punto 4 precedente, debo agregar otro detalle curioso. En la intervención del funcionario a cargo del Iduar de marzo de 2022, y que fue la primera señal que recibió la UNM sobre este conflicto, se soslayó de manera absoluta al Decreto Municipal N° 3004/21, que ordenaba la inscripción del predio a nombre de la Municipalidad.


No se lo menciona, a pesar del nivel de detalle que se le atribuye al análisis. Ese pormenorizado análisis fue notificado a la UNM y la UNM lo impugnó. La Municipalidad no se pronunció hasta octubre de este año, pero ahora pretenden decir que la impugnación de la UNM fue interpuesta recién el 29 de septiembre. Evidentemente, se trata de una ficción para legitimar un proceder administrativo anómalo.

6. La negativa al otorgamiento de la vista de las actuaciones 4078-227309-S-2021 es una violación grave a la garantía del debido proceso que no encuentra justificativo en los argumentos esgrimidos. Debe la Administración municipal terminar con el secretismo y exhibir los antecedentes que luego constituyeron la causa del acto en cuestión.

### III. Petitorio

En virtud de los argumentos precedentes, solicito que se deje sin efecto el Decreto Municipal N° 3727/2022.

Atentamente.

  
Ab. GUILLERMO E. CONT  
SECRETARIO  
LEGAL Y TECNICO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

